

Políticas que desactivan el empleo



LA ESQUINA

Miguel Valverde
mvalverde@expansion.com
@MiguelValverde4

Uno de los vectores de la reforma laboral que prepara el Gobierno es la modificación de las políticas activas de empleo, de apoyo a la ocupación, a través de las instituciones: el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Servicio Público de Empleo, las comunidades autónomas, las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CCOO y UGT. No es ninguna broma, porque con el apoyo de 680 millones de los fondos europeos de recuperación, el Gobierno destinará a ello 3.500 millones de euros. Entre otras cosas, a que las comunidades autónomas puedan financiar una competencia que es suya, como la de las políticas activas de empleo.

Sin duda que Yolanda Díaz, vicepresidenta Tercera y ministra de Trabajo, tiene toda la voluntad de arreglar este viejo problema del mercado laboral: nunca han funcionado las políti-

cas institucionales de apoyo al empleo y de atención a los desempleados. Es más, Gobierno tras Gobierno, las recetas son las mismas y, al final, tampoco resultan las cuantiosas subvenciones de cotizaciones sociales que pueden recibir los empresarios por emplear a personas de difícil inserción laboral: parados de larga duración; jóvenes sin cualificación; mayores de 45 años o algunos colectivos de mujeres. De hecho, por esta razón el Gobierno estudia una reordenación de las bonificaciones de las cotizaciones sociales para crear empleo estable. Su coste está entre 3.000 y 6.000 millones de euros anuales.

El Gobierno ha presentado a los agentes sociales una propuesta de acuerdo sobre las políticas activas con nueve puntos que son un conjunto de buenas intenciones, sin concretar cómo se pueden realizar. Y, además, en buena

La propuesta del Gobierno sobre la reforma de las políticas de apoyo al empleo se acercan bastante a viejas recetas

parte, son una repetición de las viejas propuestas. En muchos casos, denotan que, como en tantas otras cosas, las comunidades autónomas son unas estructuras carísimas que no sirven para garantizar que el desempleado se sienta protegido por el Estado. Tantos años después, el Gobierno reivindica la colaboración entre las Administraciones y cruzar la información que tiene cada una para cruzar la oferta y la demanda. Maravillas Rojo, secretaria de Empleo con Celestino Corbacho de ministro de Trabajo, entre 2008 y 2010, ya intentó crear una página en línea, en la que el Gobierno central y las comunidades autónomas pudiesen cruzar oferta y demanda de empleo. Por ejemplo, que un empresario gallego pueda encontrar al trabajador que busca en la Región de Murcia, y viceversa. O que un desempleado andaluz pueda hallar en Islas Baleares un trabajo adecuado a su perfil. Pues nunca ha funcionado. Entre otras cosas, por las reticencias de las comunidades autónomas a compartir información y sistemas informáticos.

Los miles de opositores a puestos en las Administraciones comprueban todos los años

que muchas comunidades autónomas hacen coincidir las pruebas en el mismo día para impedir que se presenten ciudadanos de otras regiones. Muchas veces estas Administraciones actúan como jinetes del gaznate del parado. Por no hablar de las nacionalistas, que forzaron la denominación de Servicio Público de Empleo Estatal, por no llamarlo Nacional. No cabe mayor sandez.

Pero bueno, años más tarde entre las recetas de las políticas activas el Gobierno propone, por enésima vez, el seguimiento personal del desempleado para facilitarle el reciclaje profesional y su reinserción laboral. Aunque Díaz pueda cumplir su compromiso de consolidar las plazas laborales de los 3.000 orientadores que hay ahora, y de contratar a 1.000 más, ni siquiera bastarían para atender a millones de parados. Por lo tanto, una de las muchas razones del elevado paro en España es que durante muchos años los sucesivos gobiernos y las comunidades autónomas se han dedicado a gastar decenas de miles de millones en desactivar más que en activar el empleo. Su ineficacia es propia de la heurística.